

SEGUNDO LUGAR

AMÉRICA LATINA, DE LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Álvaro López Sánchez

La gran mayoría de los académicos, politólogos e intelectuales de distintas disciplinas insisten en que la democracia liberal es la mejor forma de gobierno que el ser humano ha creado, que es producto de un proceso evolutivo en el cual nuestra especie ha experimentado con distintas formas de organización que comienza con las tribus, y que con la creación del Estado fue adquiriendo distintas formas hasta llegar a donde estamos hoy. Sin embargo, muchos de ellos también concluyen que los individuos se sienten cada vez menos representados por sus gobiernos, a los cuales ven como algo ajeno.

La democracia representativa presupone que el individuo votará por el candidato que mejor lo represente a él y a sus intereses. Los candidatos, que en la mayoría de los casos proceden de un partido político con una doctrina ideológica,

ofrecerán un paquete de propuestas, y el individuo deliberará cuál es la mejor opción de entre todos ellos. Es decir, el individuo, por medio de su voto, consiente a su representante para que tome decisiones a su nombre.

La realidad es que el ciudadano occidental se siente cada vez menos representado por sus gobernantes y América Latina no es la excepción. En el caso de América Latina tenemos que partir también del hecho de que si bien la mayoría de los países que la conforman ya son democracias, estas siguen siendo muy imperfectas, dado que no han logrado construir un Estado de derecho y unas instituciones sólidas que garanticen su buen funcionamiento. Vemos que en algunas regiones todavía existen problemas para garantizar elecciones limpias; y de igual forma persiste, en la mayoría de los países, el patrimonialismo y las prácticas clientelares que distorsionan el funcionamiento de la democracia.

Evidentemente, si queremos que las democracias funcionen bien, necesitamos que los individuos tengan representación en el gobierno: no solo formalmente a la hora de votar, sino también que puedan consentir a los gobernantes o las facciones con las que simpatizan. Para poder aspirar a eso primero tendremos que entender cómo es que llegamos aquí, cómo fue evolucionando el Estado hasta llegar a la democracia, y cómo es que dentro de ella se creó esta crisis de representatividad. De la misma forma, tenemos que hablar de la evolución de las instituciones en América Latina para entender las particularidades de nuestra región para que, de esta forma, podamos proponer algunas rutas para resolver la crisis de representatividad que se extiende en nuestro continente.

En un principio, los seres humanos se organizaban en tribus para poder satisfacer sus necesidades. Según Thomas Hobbes, en ese estado de anarquía, donde el ser humano

tenía derecho a todas las cosas, se vivía una situación de barbarie donde todos peleaban contra todos, por lo que se hizo indispensable crear un Estado regido por el derecho, donde el individuo cediera algunos de sus derechos (dados por la naturaleza) al soberano para que así los individuos pudieran satisfacer sus necesidades de mejor forma (1998).

Así, al ser parte de un Estado soberano, el ser humano se despojó del derecho a matar o a despojar de sus bienes a sus semejantes para poder aspirar a tener una mejor calidad de vida. Por su parte, sir Paul Collier, profesor de economía y políticas públicas de la Universidad de Oxford, afirma que la evolución hacia el Estado fue producto de las economías de escala dentro de un entorno violento donde una persona fuerte que fuera improductiva podía quitarle la cosecha a aquella persona que fuera débil y productiva sin que hubiera entidad alguna que pudiera reprender al primero; y de la misma forma, los débiles productivos podían organizarse para defenderse del fuerte improductivo, o viceversa, donde los fuertes improductivos pudieran hacer lo mismo para despojar de su cosecha a aquellos que fueran fuertes y productivos a la vez (pp. 226-227).

La Grecia antigua, que no constituía una entidad política unificada, sino que estaba compuesta por varios estados que eran independientes entre sí (*polis*), vio nacer una de las primeras manifestaciones democráticas, aunque no era una democracia tal y como nosotros la conocemos actualmente.

De acuerdo a Bernard Manin (1997), los cargos públicos dentro de la asamblea griega se elegían por medio de un sorteo. Todos los que tenían derechos políticos podían postularse a un cargo y por medio de una tómbola (sin importar el mérito ni alguna otra variable) se llevaba a cabo la elección. La población no consentía a sus gobernantes porque la

población no los elegía (no se trataba de una democracia representativa); el componente democrático consistía en que cualquier ciudadano podía postularse a un cargo público.

La república romana, por su parte, fue la que, junto con la Grecia antigua, asentó las bases del Estado moderno, tanto en lo político como en lo jurídico. Los romanos utilizaron el método de elección para elegir a los miembros de su asamblea. Por ejemplo, en los comicios centuriados, la votación comenzaba con las centurias más acaudaladas y terminaba con las más pobres: los votos de los primeros valían más que los de los segundos (Montanelli, 2016).

El sistema de elecciones, como apunta Bernard Manin, no fue considerado un elemento democrático hasta hace pocos siglos. Ni Madison ni Rousseau ni Hobbes considerarían democracia a lo que ahora conocemos como tal, la cual se asociaba más con la democracia griega donde se elegían a los representantes por sorteo y donde todos se podían postular; sino que más bien se consideraba una forma de aristocracia dado que los ciudadanos elegían a sus representantes, quienes pertenecían a una élite política.

Fue hasta que se introdujo el concepto del consentimiento (los ciudadanos, al votar por un candidato, le dan su consentimiento para que los representen y tomen decisiones a su nombre) en el que se adoptó como una forma de democracia (democracia representativa). Consistía, sí, de un elemento aristocrático como la elección de representantes que forman parte de una élite, pero también de otro democrático: el ciudadano tiene el derecho y la libertad de elegir a sus representantes y les da el consentimiento para que tomen decisiones a su nombre. Asimismo, si el representante no cumple con las expectativas, el ciudadano puede votar en las siguientes elecciones por la facción opositora, con lo cual se asume que el representante entonces

tendrá incentivos para gobernar bien. Si quien está en el poder o su facción (según sea el caso) quiere permanecer, entonces debe satisfacer las expectativas de su gobernados.

Pero ¿cómo llegamos a la democracia y cómo surgieron los estados democráticos? Francis Fukuyama señala la importancia que la Iglesia católica tuvo, antes de la Reforma, en el surgimiento del Estado moderno (compuesto por un Estado fuerte, el Estado de derecho y la rendición de cuentas). Esto sucedió porque, a diferencia del mundo árabe, donde las instituciones religiosas controlaban el Estado, o de China, donde la ausencia de religión dejó al Estado con el monopolio del poder, en Occidente, la Iglesia católica fungió como una suerte de contrapeso al Estado, de tal forma que era más difícil intentar crear un Estado completamente absolutista y a la vez la propia Iglesia tampoco podía aspirar a acaparar todo el poder.

Ambas entidades se contraponían entre sí. El orden legal moderno, señala Fukuyama (2012), tuvo su raíz en la lucha que la Iglesia desató contra el emperador en el siglo XI. De la misma forma, Hannah Arendt (1951) señala que, en la Edad Media, a pesar de las rígidas divisiones de clase, se concibió al ser humano, gracias a la religión y a la ley natural, como un ser digno sin importar su posición o procedencia. Los regímenes totalitarios como el nazismo o el comunismo soviético se explican en parte porque prescindieron de la ley natural y del concepto del ser humano como ser digno.

La tradición cristiana terminó, de alguna u otra forma, influyendo en el pensamiento occidental y en la cosmovisión que los occidentales tenemos del mundo. Esto no quiere decir que la Iglesia católica haya creado por sí misma el Estado moderno; de hecho, el Estado moderno también se explica por la Reforma protestante, la Ilustración, la Revolución francesa, la Revolución Industrial, así como la

separación entre Iglesia y Estado que culminó en el nacimiento de las naciones; pero no se puede negar que la presencia del Estado y la Iglesia como dos diferentes entidades que coexistieron juntas crearon las condiciones para que el Estado moderno surgiera en Occidente.

Tras la Revolución francesa y la Revolución Industrial se consolidaron las naciones donde estas proporcionaron a los individuos una sensación de pertenencia. Ser francés, inglés o alemán, bajo un idioma en común, comenzó a ganar relevancia. La monarquía perdió una cantidad considerable de poder y este pasó a manos del Estado que representaría, al menos en el papel, los intereses de los ciudadanos por medio de un contrato social. Las bases estaban cimentadas para la llegada de los regímenes democráticos.

Dicho esto, debemos señalar que la democracia fue adoptada tanto por Estados consolidados como por naciones que no habían logrado concebir un Estado fuerte. Fueron las naciones del norte de Europa las que lograron construir un Estado fuerte, gracias en gran medida a las revoluciones francesa e industrial y a los procesos que se vivieron en esa entidad. Por su parte, en el continente americano, pero sobre todo en América Latina, cuyas naciones nunca transitaron por algo parecido a la Revolución francesa o la Revolución Industrial y que fueron producto de la conquista, fue prácticamente imposible la creación de Estados fuertes con un estado de derecho sólido (Fukuyama, 2015).

En las naciones con un Estado fuerte se lograron crear democracias prósperas por medio del respeto a la ley y unas instituciones sólidas. En cambio, en las naciones que no lograron consolidar al Estado, se crearon democracias imperfectas que no solo podían ser deshechas y reemplazadas temporalmente por regímenes autoritarios (como ocurrió en América Latina), sino que se caracterizaron por el

patrimonialismo y el clientelismo. Si bien el clientelismo puede ser percibido como una perversión de la democracia, Francis Fukuyama apunta que se trata más bien de una etapa de transición o una forma de democracia temprana.

Es decir, en una etapa anterior, quienes no pertenecían a las élites económicas y políticas no tenían ninguna forma de acceso a ellas y entonces dichas élites acaparaban todo el poder. El patrimonialismo y las prácticas clientelares fueron entonces los primeros medios en los que el pueblo pudo, por medio de dádivas o puestos, tener mayor movilidad social. Fukuyama pone de ejemplo a Estados Unidos como una nación que adoptó en un principio una democracia patrimonialista y clientelar, pero que con el tiempo logró convertirse, gracias a los valores de sus «padres fundadores» y a una nueva generación que estaba harta de las viejas formas de hacer política, en una nación sólida, democrática y próspera.

Las naciones democráticas de Occidente (entre las que se encuentran las latinoamericanas) vieron expandir el derecho al voto progresivamente entre toda la población. Primero, como fue el caso de Estados Unidos, solo podían ejercer el derecho a voto los ciudadanos que tuvieran una propiedad o que pertenecieran a una raza. Posteriormente, el derecho al voto se fue universalizando y la mujer, como parte de la primera ola del feminismo representada por las sufragistas, comenzó a ganar dicho derecho. En algunas naciones, las mujeres lo ganaron de forma más temprana que en otras. Por ejemplo, las mujeres de Finlandia lo obtuvieron en 1906, las de Estados Unidos en 1920, las de Francia en 1944 y las de Suiza hasta 1971.

En América Latina también existen muchas disparidades: mientras en Uruguay las mujeres ganaron el derecho al voto en 1927 o Ecuador en 1929, en Argentina este derecho

se obtuvo en 1947 y en el caso de México hasta 1953. Dichas disparidades son un ejemplo de que la expansión del derecho al voto entre toda la población no fue uniforme entre los distintos países de América Latina y Occidente, sino que correspondió al proceso propio que vivió cada país.

Para entender el desencanto de los votantes occidentales y latinoamericanos con la política, también debemos entender cómo ha evolucionado la forma en que el individuo ejerce su voto. Bernard Manin señala tres etapas: la primera y la más temprana es el parlamentarismo, donde los votantes eligen a personas de confianza quienes son líderes o representantes notables dentro de una comunidad dada. La segunda etapa consiste en la democracia de partidos donde los votantes ejercen su voto de forma leal por el partido que represente sus ideales. Así, los sindicalizados solían votar por los partidos socialistas, mientras que los empresarios lo hacían por los conservadores. La tercera etapa es la democracia de audiencias, producto en gran medida de los medios de comunicación, que puede explicar parte de la crisis de representatividad actual, dado que la elección se ha vuelto más personalista.

El individuo ya no vota por algún partido o programa, sino por alguna figura política cuya campaña está basada más bien en la mercadotecnia y en los medios de comunicación. Estos, de acuerdo a Bernard Manin, terminan imponiendo su agenda con base en sus intereses privados; o al menos influyen en las elecciones. Los medios y la prensa son capaces de modificar la percepción que el individuo tiene de uno u otro candidato. Así, los partidos ya no buscan a los electores leales que simpatizan con su doctrina ideológica, sino que buscan «atrapar todo lo posible» para ganar elecciones, lo cual explica que los partidos políticos empiecen a vaciarse de contenido ideológico y se vuelvan incapaces de

ofrecer una identidad a sus electores. Los votantes, ahora convertidos en audiencias, se vuelven cada vez más volátiles y menos leales, votan cada vez más por el personaje y cada vez menos por los partidos.

En América Latina, este proceso coexiste con la democracia caracterizada por el patrimonialismo y el clientelismo. El voto duro que ostentan los partidos no está basado tanto en la lealtad ideológica, sino en la lealtad clientelar, donde el votante duro ejerce su voto porque obtendrá un beneficio inmediato a cambio por parte del candidato o partido por el que votó. En las democracias clientelares, la lealtad se entiende por el lazo de dependencia del votante hacia el partido. La democracia clientelar puede coexistir con la democracia de audiencias, donde un partido crea una campaña sin contenido ideológico y con una delineada estrategia de medios para crear un personaje atractivo para las masas y este, a su vez, promete dádivas y beneficios inmediatos como despensas o hasta monederos electrónicos, como ha sucedido en países latinoamericanos tales como México.

Hasta ahora hemos explicado cómo es que el Estado evolucionó y cómo lo hizo la democracia para llegar a un estado de las cosas donde los ciudadanos se sienten completamente ajenos a la política. El caso de América Latina tiene algunas particularidades y peculiaridades, pero también comparte rasgos con el fenómeno de desencanto que se vive en todo Occidente, por lo cual es imperativo explicar los dos.

En la actualidad, la mayor parte de las naciones latinoamericanas son democráticas, pero también la mayoría son democracias frágiles. Según el Índice de Democracia llevado a cabo en 2016 por *The Economist*, solamente Uruguay es considerada una democracia sólida con una calificación de 8.17 mientras que Chile le sigue con una calificación de 7.78.

De acuerdo a *The Economist*, países como México, Brasil, Argentina o Colombia son democracias muy frágiles; Bolivia, Ecuador y Venezuela son regímenes híbridos (que combinan rasgos democráticos con rasgos autoritarios) mientras que Cuba es la única nación considerada como una dictadura (2017). Países como México o Paraguay tienen una tendencia a la baja y están en riesgo de ser considerados regímenes híbridos.

A lo largo de la historia contemporánea de América Latina hemos visto cómo varias democracias imperfectas decaen para convertirse en regímenes híbridos o inclusive en dictaduras. Experiencias como el ascenso de dictaduras de Jorge Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile, la dictadura militar en Brasil y recientemente la degeneración de la democracia en Venezuela bajo las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, nos muestran que las democracias frágiles no solo no funcionan bien, sino que corren el riesgo de perder su carácter democrático.

Si bien en los países latinoamericanos se llevan a cabo elecciones y hay representatividad partidista, estas calificaciones se explican porque existen muchas deficiencias en el funcionamiento de los sistemas democráticos, en especial por su carácter patrimonialista y clientelar que distorsiona el funcionamiento de la democracia, por las tentaciones autoritarias que se viven en distintos países y otro tipo de amenazas como el narcotráfico o las guerrillas. Por eso es que en el caso de América Latina no solo se deben considerar las razones del descontento que afecta a los países occidentales, sino también las particularidades propias que tienen que ver también con una democracia frágil donde las prácticas del pasado no se han ido del todo.

Las últimas experiencias que hemos vivido en los países occidentales nos dejan patente una crisis de representatividad

generalizada, el desencanto de los ciudadanos con sus políticos parece ser cada vez mayor. Algunas naciones han visto surgir partidos u organizaciones de ultraderecha o de izquierda radical que acaparan el descontento de la población, que busca alternativas para saciar su hartazgo. Podemos entender en parte el vacío ideológico de los partidos políticos gracias a la democracia de audiencias de la que hablamos anteriormente, y al fin de la batalla ideológica que culminó con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS para dar paso a una suerte de pensamiento único, donde se planteó que la democracia liberal capitalista debería ser concebida como el estadio final al que llegaría el ser humano en cuanto a su forma de organización política y económica.

Pero incluso podríamos irnos un poco más atrás para entender cómo los partidos han dejado de ser, poco a poco, una referencia ideológica. Un claro ejemplo, como lo señala Tony Judt (2011), es que en los años setenta, con el progresivo desencanto de los intelectuales con el comunismo y con la liberalización de los mercados, la izquierda se fue recorriendo al centro en términos económicos y perdió su diferenciación con respecto de los partidos de derecha, por lo que tomó nuevas banderas para poder diferenciarse, tales como los derechos humanos, los derechos de la mujer y de personas con otra preferencia sexual, la ecología, entre otras. Actualmente, la menor diferencia ideológica entre distintos partidos reside en su postura ante temas de carácter social y ya no tanto en materia de economía, donde ambos lados del espectro ideológico (con excepción de las facciones más radicales) han adoptado el capitalismo como el modelo económico imperante donde ambas posturas solo muestran sutiles diferencias (por ejemplo, aquellas relacionadas con el Estado de bienestar).

Este mismo proceso de «desideologización» se ha venido dando en América Latina, aunque de forma más tardía. En los años ochenta y noventa, después de la crisis de los modelos de sustitución de importaciones, se aplicaron recetas liberales (como el Consenso de Washington) que no tomaron en cuenta las particularidades de cada país y que por lo tanto no generaron los resultados esperados (Sachs, 2005). El resultado es que varios de los países de nuestro subcontinente, en especial los que obtuvieron resultados más adversos y los que tenían más problemas para conformar un Estado de derecho sólido, optaron por regímenes de izquierda populista que recogían el tradicional discurso antiimperialista, tal y como ocurrió en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y hasta la propia Argentina. Dichos regímenes no solo se caracterizan por su contenido ideológico, sino más bien por la relación fuertemente paternalista que intentan establecer con sus gobernados.

El progresivo desencanto con esos regímenes ante las fallidas políticas económicas ha debilitado ese bloque que se presentó como una alternativa ante el capitalismo y la globalización. Pero, a diferencia de los países más desarrollados, las prácticas clientelares y patrimonialistas persisten, y ante el vacío ideológico, siguen siendo determinantes para ganar elecciones. Es decir, los partidos en América Latina coinciden con los europeos y los estadounidenses en el aumento de su incapacidad para diferenciarse ideológicamente de sus contrapartes y donde sus posturas residen más bien en factores coyunturales, pero se diferencian en cuanto a que en nuestro subcontinente la mayoría de los partidos continúan valiéndose del clientelismo para adquirir poder político.

Entonces, mientras en Europa el discurso típico del problema de representatividad es «los políticos cada vez nos

representan menos», en América Latina es «los políticos cada vez nos representan menos, y a la vez, son muy corruptos y buscan comprar conciencias». La democracia de audiencias, la pérdida de contenido ideológico de los partidos políticos, así como la persistencia del clientelismo nos ayudan a explicar el desencanto de los latinoamericanos con la clase política.

Por ejemplo, de acuerdo a Latinobarómetro, en el año 2015 solo 31.6% de los latinoamericanos se sentía representado por su gobierno. El país que tiene la calificación más alta, Uruguay, con 50%, es el que a la vez tiene una democracia más sólida de acuerdo al índice de *The Economist*. Es de notar también que las naciones que han adoptado regímenes de izquierda populistas tienen un porcentaje de aprobación relativamente alto comparado con sus contrapartes capitalistas (los primeros oscilan entre 30% y 48% y los segundos entre 13% y 37%). Dicha aprobación, más que tener una relación con el nivel de democracia, puede ser resultado de la polarización producida por esos regímenes en dichas naciones y de los programas sociales que han mantenido satisfecho a un sector de la población (Latinobarómetro, 2015).

Los ciudadanos de los países con regímenes más capitalistas (gobernados por partidos conservadores o socialdemócratas), a pesar de que suelen tener una economía más estable y unas instituciones relativamente más fuertes que los países de carácter populista, se sienten menos representados por sus gobiernos. A diferencia de los regímenes populistas, donde el carácter personalista y carismático de sus líderes logra atraer una considerable cantidad de leales seguidores, los partidos conservadores y socialdemócratas no han logrado hacer que sus gobernados se sientan representados por ellos.

La evaluación de los partidos políticos, de acuerdo a Latinobarómetro, sigue bajo una tésitura parecida: 26% los evalúan positivamente contra 63% que los reprueban (el restante se distribuye entre personas que no respondieron o no saben). Uruguay es la nación donde tienen mayor aprobación (50%), aunque en este caso no se observa una diferenciación entre los países con un régimen populista de izquierdas y las democracias capitalistas.

Una de las razones de la crisis de representatividad que se mencionan es que se considera que los políticos no gobiernan para los ciudadanos, o bien, que unas élites de poder (de carácter público o privado) dominan la escena para satisfacerse a ellos mismos. Si se toma como referencia la encuesta de Latinobarómetro, casi 67% de los latinoamericanos piensa que su país es gobernado por unos cuantos poderosos en su propio beneficio.

De nuevo, Uruguay, la democracia más sólida, es el país donde un menor porcentaje de ciudadanos piensa eso (38.2%), y de la misma forma, los países con regímenes populistas o carismáticos, en tanto el discurso del gobierno insiste en la «voluntad del pueblo», tienen un porcentaje relativamente bajo (con excepción de Venezuela, que ya manifestaba los primeros signos de una crisis política), mientras que esa creencia es más popular dentro de los países de corte más capitalista y que no han desarrollado un Estado de derecho sólido.

Así, podemos concluir que la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos no se sienten representados y consideran que el poder está en manos de unos pocos. También podemos percatarnos de que el desencanto de los ciudadanos con la política disminuye por dos razones: la primera es un Estado de derecho sólido, como es el caso de Uruguay, y la segunda, por los discursos populistas de líderes carismáticos que logran cautivar a un sector de la población.

En tanto la opción de los regímenes populistas es descartable por su inviabilidad económica y social, podría pensarse que con la construcción de un Estado de derecho sólido lograremos que más ciudadanos participen en el quehacer público y político, pero también se puede argumentar, a la inversa, que para crear un Estado de derecho sólido es importante una mayor participación ciudadana y un mayor involucramiento de los individuos.

Para demostrar la relación entre un Estado de derecho sólido y el nivel de participación ciudadana, Robert Putnam y sus colegas llevaron a cabo un estudio en Italia, y que plasmaron en su libro *Making Democracy Work*, para entender por qué las regiones del norte están más desarrolladas que las del sur.

El sistema de gobierno en las distintas regiones es el mismo y a la vez es relativamente autónomo (es decir, las regiones italianas tienen un considerable grado de autonomía) Si se toma esto en cuenta, ellos encontraron que la fortaleza de las instituciones (a pesar de que estaban concebidas de la misma forma en todas las regiones) tenían una correlación directa con el nivel de participación cívica. En las regiones con una mayor cultura cívica existe una mayor confianza y capacidad de cooperación entre los ciudadanos, mientras que entre los que existe una menor cultura cívica, los individuos solo confían en sus familiares y cercanos, y como desconfían de los demás, tienen mayores incentivos para romper las reglas y así se fomenta un mayor nivel de corrupción.

En las regiones con mayor cultura cívica, los políticos suelen estar más abiertos a los temas de equidad política y democracia, mientras que en las regiones con una menor cultura cívica los gobernantes suelen ser más autoritarios y más proclives a establecer una relación clientelar con sus

gobernados; y de la misma forma, en las regiones con menor cultura cívica los ciudadanos suelen creer más que se sienten oprimidos y que las personas en posiciones de poder abusan de ellos (Putnam, 2003).

Podemos encontrar muchas similitudes entre el caso italiano y el de los países latinoamericanos. Podemos observar un contraste asombrosamente similar entre el mostrado por el estudio de Robert Putnam y el que se observa entre Uruguay y la mayoría de los países latinoamericanos. Uruguay tiene la democracia más sólida, sus ciudadanos confían más en su congreso y en sus partidos políticos, pero también tiene una mayor participación ciudadana.

Cuando, para efectos de la encuesta de Latinobarómetro, se les preguntó a los latinoamericanos si platican con sus amigos de política, los uruguayos se ubicaron en el primer lugar (32% contra 30% promedio de América Latina); es la tercera nación donde más personas afirman haberse reunido para firmar un tema o tratar una petición (23.8% contra 17% de América Latina), donde más gente ha salido a protestar (16.2% contra 10.6%); y de la misma forma, es uno de los tres países (junto con Argentina y Panamá) donde los ciudadanos confían más en sus semejantes.

Entonces, para tener una mayor participación política, requerimos de una mayor participación ciudadana. Si tenemos una mayor participación ciudadana habrá mayor participación política, lo cual se reflejará en un Estado de derecho más sólido y democrático, y unas instituciones que funcionen para todos. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Por dónde empezar?

Para poder plantear una solución, tenemos que entender de mejor forma qué es el poder. Max Weber lo define como la probabilidad de tomar decisiones que afectan la vida de otros, pero en resistencia de estos. (Zabludowsky, párr. 2).

Para Michel Foucault (1988), el poder es una relación asimétrica constituida por dos entes: la autoridad y la obediencia. Postula que no se trata de un poder que está localizado, sino que invade todas las relaciones sociales: el hijo que obedece al padre, el alumno que obedece al profesor, el ciudadano que obedece al gobierno, y los políticos que obedecen (o deberían obedecer, en teoría) la voluntad del pueblo (pp. 3-20). Aristóteles (2004) postulaba que algunas personas habían nacido para mandar y otras para obedecer, pero en los gobiernos democráticos esto no es así y más bien depende del contexto en el que se encuentre el individuo.

No se nace para obedecer, sino que se obedece con respecto al entorno en el que se encuentra y que puede ser distinto entre diferentes individuos: al ser parte del Estado, los individuos tienen la obligación de obedecer las leyes que lo rigen, pero también están obligados a obedecerlas las mismas personas que se encargan de ejecutarlas. Los individuos que son parte de una organización están obligados a obedecer ciertas normas si quieren permanecer ahí, pero no están obligados a hacerlo quienes no son parte de esa organización, los empleados tienen que obedecer a sus jefes, pero no quienes no son sus empleados, etcétera.

En las democracias el pueblo tiene la obligación de obedecer a las leyes y es el gobierno el que las crea y procura su cumplimiento, pero el pueblo también tiene poder sobre el gobierno, quien en teoría debe obedecer a los ciudadanos para permanecer en el poder.

Como mencionamos, en la democracia representativa el pueblo no le da «órdenes directas» al gobierno de lo que debe de hacer, sino que con su voto y su consentimiento le otorga poder para que decida en su nombre por un tiempo limitado. Pero la dinámica dentro de las democracias representativas no queda ahí: el ciudadano puede ejercer poder

sobre su gobierno por medio de la libertad de expresión y su derecho a la libre manifestación, a la vez que tiene el derecho a involucrarse dentro de la política. Asimismo, el ciudadano tiene el derecho a crear agrupaciones ciudadanas para incidir en lo público.

Dentro de una manifestación, la cantidad de poder que esta tiene guarda cierta relación con su tamaño. Es más probable que el gobierno considere las peticiones de la manifestación o se sienta amenazado por ella si esta es muy grande. Si un gobierno quiere reprimir una manifestación muy pequeña, le bastará con utilizar una pequeña cantidad de poder (enviar a un pequeño grupo de policías, por ejemplo) para dispersarla; en cambio, si es muy grande, posiblemente tendrá que valerse de todo un comando o del ejército. Pero en las democracias las leyes limitan al gobierno para el ejercicio del poder (lo cual lo restringe para reprimir las manifestaciones no violentas).

El propio Estado de derecho, por medio de las leyes, pone límites a la cantidad y al tipo de poder que el gobierno puede ejercer. De la misma forma, en las naciones democráticas, el gobierno está obligado a rendir cuentas y a ser transparente, lo cual restringe considerablemente su capacidad de poder para satisfacer los intereses de quienes lo conforman.

Dicho esto, la participación ciudadana es un contrapeso al exceso del poder del gobierno. Este concepto no solo incluye el derecho a la manifestación, sino el derecho a agruparse e incidir políticamente. Las organizaciones ciudadanas no solo pueden aspirar a acumular cierta cantidad de poder por su tamaño o su poder económico, sino por su conocimiento y *expertise*. Conforme la participación ciudadana es más grande, es decir, esta en su conjunto adquiere más poder (el poder a la vez no se concentra en una sola

entidad sino en varias agrupaciones) y funge como contrapeso al poder del gobierno, el uso del poder del Estado se encuentra más restringido y más condicionado. Así, el gobierno, vigilado exhaustivamente por los ciudadanos que se involucran y participan, tiene menos incentivos para abusar del poder, porque el precio de hacerlo es mucho más alto que cuando se tiene una ciudadanía más apática y poco participativa. Los ciudadanos tienen tal cantidad de poder para evitar abusos de sus gobiernos.

De acuerdo con la encuesta de Latinobarómetro, la participación ciudadana es escasa en las naciones latinoamericanas: solo 30% de los latinoamericanos platica de política con sus amigos, 17% se ha juntado con otras personas para tratar un tema o firmar una petición y 10% ha salido a las calles a marchar. Y como esta escasez permite a sus gobernantes acumular poder de tal forma que puedan cometer más abusos y atropellos, entonces los ciudadanos no se sienten representados por sus políticos y sienten que son oprimidos y abusados por parte del gobierno.

¿Cómo pueden entonces los ciudadanos de una nación acumular poder a través de la participación ciudadana para ser un contrapeso al gobierno, de tal forma que puedan vigilarlo e incidir en él, para que así, el gobierno se desempeñe de mejor forma, se generen instituciones sólidas y un Estado de derecho sólido, lo cual a la vez va a derivar en una mayor confianza hacia el propio gobierno y, por ende, una mejor representación?

Los países latinoamericanos deben dejar de entender la relación entre individuo y gobierno como una relación paternalista. Isaiah Berlin (1969) afirma que:

El paternalismo es despótico, no porque sea más opresivo que la tiranía brutal, descarada e inculta, ni solo porque

ignore la razón trascendental que está encarnada en mi cuerpo, sino porque es un insulto a la concepción que tengo de mí mismo como ser humano, determinado a realizar mi propia vida de acuerdo con mis propios fines (no necesariamente racionales o benéficos), y, sobre todo, con derecho a ser reconocido como tal por los demás.

De este modo, podemos entender que el individuo que se somete a una relación paternalista restringe su libertad positiva: su libertad de ser y llegar a ser algo. Bajo el paternalismo, el gobierno genera una relación de dependencia donde otorga algún beneficio al individuo a cambio de la sumisión de este a un gobierno o a un partido; el individuo depende de dicho ente superior en vez de depender de sí mismo. Cuando hablamos de crear ciudadanía necesitamos aspirar a que los ciudadanos obtengan una libertad positiva más amplia para que así sepan cuáles son sus convicciones y las puedan defender. Cuando hablamos de que los ciudadanos estén representados en el gobierno es condición primera que dichos ciudadanos sepan qué quieren y a qué aspiran y que luchen por ello, para que entonces puedan esperar que el gobierno represente sus valores y convicciones. Una relación paternalista y dependiente, en cambio, restringe o anula los incentivos para que el humano se realice a sí mismo y se descubra, al ser así más maleable y manipulable por sus gobernantes. El gobierno, en el contexto de la relación paternalista, le dice al individuo qué pensar; en cambio, un ciudadano que goza de libertad positiva piensa por sí mismo, y en consecuencia le dice al gobierno qué es lo que debe hacer. Lo hace votando por el candidato que represente sus convicciones y sus ideales, y también participando activamente en la arena social (ya sea por medio de organizaciones civiles, colectivos, agrupaciones o manifestaciones)

para intentar incidir en las decisiones que se toman en el gobierno.

¿Cómo se puede transformar un cultura paternalista y clientelar que solo puede aspirar a ser una democracia imperfecta y distorsionada a una donde los ciudadanos participan activamente, aspiren a tener mejores gobiernos y así se sientan representados? Francis Fukuyama nos dice que la democratización de las naciones tiene que ver mucho con el tamaño de las clases medias; esto ocurre tanto en los Estados fuertes que todavía no transitaban a la democracia, pero que al llegar a ella (gracias a la fortaleza del Estado) se convirtieron en una democracia sólida (como fue el caso de Prusia), como en las naciones que ya habían intentado democratizarse pero que tenían un Estado de derecho débil y necesitaban fortalecerlo, (como fue el caso de Estados Unidos) y que es también el estado actual de las naciones latinoamericanas. Cuando la clase media de una determinada nación adquiere la suficiente masa crítica, o como señala sir Paul Collier, cuando adquiere el suficiente poder adquisitivo, es cuando esta decide confrontar al gobierno y exigir cambios; o bien, se puede manifestar, como en Estados Unidos, por su intención de involucrarse en política para así desplazar a las viejas élites más proclives al paternalismo y cambiar la relación entre los ciudadanos y los políticos.

A su vez, las clases medias crecen cuando una nación se desarrolla económicamente y cuando los dividendos de ese desarrollo se distribuyen lo suficiente (y no se acumula solo en manos de unos pocos) para que un sector considerable de la población ascienda a la clase media. Entonces podemos pensar que el desarrollo económico es una de las condiciones para aspirar a una democracia sólida donde el individuo se sienta más representado y se involucre más en los asuntos políticos.

Pero a la vez, no debemos dejar del lado las estructuras de castas tan típicas de la mayoría de los países latinoamericanos, las cuales inciden negativamente para la formación de una clase media ya que la raza y el color de piel ejerce cierta influencia dentro de la capacidad de movilidad social que el individuo tiene. Por ejemplo, en México, el INEGI (2017) publicó un estudio donde demostró que el tono de piel tiene incidencia en el tipo de empleo que un individuo puede obtener, así como su posición social.

Aunque el desarrollo económico y la estructura social son importantes para aspirar a generar estados más democráticos, con mayor participación ciudadana y mayor representatividad, eso no significa que tengamos que esperar a que dichas condiciones se den para empezar a llevar un cambio dentro de la ciudadanía para así generar cambios estructurales dentro de nuestros países. Por el contrario, la incipiente, pero creciente participación ciudadana puede, a su vez, por sí misma, apurar esos cambios para acelerar los otros dos procesos y así crear un círculo virtuoso. Por medio de la participación ciudadana se puede aspirar a crear un país más inclusivo en cuestión de razas (lucha que existe en varios países de América Latina a través de colectivos y organizaciones civiles) y al intentar construir un Estado más fuerte, esto puede incidir, a su vez, en un mayor desarrollo económico.

Existen otros factores que ayudan por sí mismos a desarrollar una cultura de la ciudadanía más fuerte, como es la globalización y el intercambio de información. En el caso de México, hemos visto en los últimos años un notable crecimiento de la participación ciudadana a través de organizaciones civiles, aunque ello no haya tenido una estrecha relación con el crecimiento (casi inexistente) de la clase media. Pero lo cierto es que gracias a la información y al

know-how importado de otras latitudes del mundo, ha sido más fácil y han existido más incentivos para la organización de la sociedad civil.

Pero parte del descontento y de la falta de representación, si recurrimos de nuevo a Francis Fukuyama, tiene que ver (tanto en América Latina como en Europa) con el hecho de que los gobiernos ya no corresponden con las realidades sociales actuales. Se dice en el lenguaje común que el pueblo tiene el gobierno que merece, y ciertamente podemos entender que los gobernantes surgieron necesariamente de la ciudadanía (en tanto los gobernantes son también ciudadanos), pero también es cierto que la cultura dentro de los gobiernos y las élites políticas pueden mostrar un rezago comparada con la cultura dentro de la ciudadanía. Un ejemplo es la España del franquismo tardío: como señala Tony Judt, años antes de que falleciera Francisco Franco gran parte de los ciudadanos ya empezaban a hablar de una nueva cultura más democrática, viajaban a otros países y querían importar lo que veían ahí.

Así, podemos concluir que una de las respuestas para involucrar a los ciudadanos en la política tiene que ver con el traslado de una cultura paternalista a una más bien horizontal y participativa, que aspire a una mayor rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Al entender que puede existir un rezago entre gobierno y sociedad podemos concluir también que el cambio dentro de las élites políticas no será inmediato: el crecimiento de la participación ciudadana en algunos países como México todavía no se ha reflejado en una mayor representatividad política ni en un gobierno más transparente; será con base en la persistencia que se empezarán a ver los cambios.

De esa manera se puede resolver el problema característico de América Latina; pero para concluir, tenemos que

insistir en que la crisis de representatividad mundial dentro de todo Occidente también ejerce cierta influencia y en este caso la respuesta es lo suficientemente complicada como para que los especialistas se pongan completamente de acuerdo en lo que se tiene que hacer. Para entender esta influencia primero tenemos que desechar los rasgos propios que muestran los países europeos y anglosajones que influyen sobre el descontento, que tienen que ver con problemas de migración, identidad o terrorismo; y como mencionamos, tenemos que retomar aquellos rasgos que comparten con América Latina como es la llamada democracia de audiencias y la pérdida de contenido ideológico de los partidos políticos.

En este caso también se ha sugerido un desplazamiento entre las clases políticas y la sociedad, incluso se ha propuesto que se debe empezar a hacer política de otras formas. Me atrevería a sugerir que en pleno siglo XXI ya no se puede pensar en términos de política tradicional donde los políticos utilizan las nuevas tecnologías y el internet para hacer «la política de siempre», sino que esta nueva realidad debería reconfigurar la forma de hacer política, una que sea más horizontal y participativa, sin que se despoje del concepto básico de la democracia representativa donde el individuo consiente con su voto a un candidato para que lo represente a su nombre.

No solo se trata de exigir a las clases políticas que cambien, sino por el contrario, incidir y buscar nuevas formas de organización para que estas en consecuencia se adapten a una nueva realidad que corresponda con la de las sociedades actuales. Se debe reformar la democracia para pasar a una de audiencias a donde no se despoje a los partidos de su contenido ideológico y que, como sucedía en la democracia de masas, la doctrina partidista y los programas propuestos

vuelvan a tener peso, pero con diferencia de aquella ocasión que más que esperar lealtad de los ciudadanos hacia los partidos que estos tengan mayor incidencia y se trate de una relación horizontal donde por medio de una mayor participación, los ciudadanos se sientan verdaderamente representados.

En esta aspiración no debemos regresar al pasado sino apuntar hacia el futuro, podemos aprender de la historia, de aquello que funcionó bien y aquello que no, pero las sociedades cambian, las realidades cambian, y la política debe servir al modelo de sociedad en el que se encuentra incrustada, no en una realidad que ya no existe. Solo de esa manera los ciudadanos volverán a involucrarse en la política y se volverán a sentir representados.

REFERENCIAS

- Aristóteles. (2004). *Política*. Biblioteca Clásica Gredos.
- Arendt, Hannah. (1951). *The Rise of Totalitarianism*. HMH.
- Berlin, Isaiah. (1969). *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*. USA, Oxford University Press.
- Collier, Paul. (2009). *Guerra en el club de la miseria. La democracia en lugares peligrosos*. Madrid: Turner. Recuperado de <https://books.google.com.mx/books?isbn=8475068758>
- Foucault, Michel. (1988). «El sujeto y el poder» en *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 50, núm. 3. (Jul.-Sep., 1988), pp. 3-20. Recuperado de <http://terceridad.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/Foucault-M.-El-sujeto-y-el-poder.pdf>
- Fukuyama, Francis. (2012). *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution*. Profile Books.
- . (2015). *Political Order and Political Decay*. Profile Books.
- Hobbes, T., y Gaskin, J. C. A. (1998). *Leviathan*. Oxford: Oxford University Press.
- INEGI. (2017). Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf
- Judt, Tony. (2011). *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945*. Madrid: Taurus-Santillana.
- Latinobarómetro. (2015). *Presenta INEGI, por vez primera, resultados sobre la movilidad social intergeneracional*. Recuperado de <http://www.latinobarometro.org>
- Manin, Bernard. (1997). *The Principles of Representative Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Montanelli, Indro. (2016). *Historia de Roma*. Barcelona: Editorial Debolsillo.

- Putnam, Robert. (2003). *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sachs, Jeffrey. (2005). *The End of Poverty*. Nueva York: Penguin Books.
- The Economist. (2017). *The Democracy Index*. Recuperado de <https://infographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/>
- Zabludovsky, Gina. «Autoridad, liderazgo y democracia (una revisión teórica)» *Revista Estudios. Filosofía-Historia-Letras*. ITAM, otoño de 1993. Recuperado de http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras34/textos2/sec_3.html